

**ALEJANDRO MORENO**

El país en llamas

Desde hace cinco años México ha estado inmerso en una espiral de violencia y crisis de seguridad que ha dejado a la población en un estado de constante temor y desesperación. La nación se ha visto ensombrecida por el crimen, corrupción y violencia desenfrenada.

La violencia en México ha alcanzado proporciones alarmantes, manifestándose en diversas formas que van desde el narcotráfico y el crimen organizado hasta la violencia de género y la política. Las disputas entre cárteles de la droga por el control de rutas de narcotráfico y territorios estratégicos han desatado una ola de violencia que ha cobrado innumerables vidas inocentes y ha dejado a comunidades enteras sumidas en el miedo y la desesperanza.

La corrupción endémica en las instituciones gubernamentales ha socavado los esfuerzos por combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. La infiltración de grupos delictivos en las esferas políticas y policiales ha generado un entorno en el que la impunidad reina y la justicia se ve obstaculizada por intereses corruptos. Esta situación ha minado la confianza de la población en las autoridades y ha exacerbado la sensación de vulnerabilidad y desamparo.

La violencia de género también constituye una grave preocupación en México, donde las mujeres enfrentan altos niveles de violencia, acoso y feminicidios. A pesar de los esfuerzos de activistas y organizaciones de derechos humanos para abordar este problema, la impunidad persiste y las mujeres continúan siendo víctimas de una cultura de machismo arraigada en la sociedad.

Además de la violencia directa, México enfrenta una crisis humanitaria derivada de la migración forzada provocada por la violencia y la inseguridad. Miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades, enfrentándose a peligros inimaginables en el camino hacia la esperanza de una vida mejor.

En este contexto desolador, es imperativo que el gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto tomen medidas enérgicas y coordinadas para abordar las causas subyacentes de la crisis de seguridad y violencia. Esto incluye la implementación de reformas estructurales destinadas a fortalecer el estado de derecho, erradicar la corrupción y promover la justicia y la igualdad de género. Asimismo, se requiere una mayor cooperación regional e internacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado de manera efectiva.

Sin embargo, más allá de las acciones gubernamentales, es fundamental un cambio cultural que promueva valores de paz, tolerancia y respeto por los derechos humanos.

La construcción de una sociedad más segura y justa requiere el compromiso y la participación activa de todos los sectores de la sociedad, así como un esfuerzo conjunto para abordar las causas profundas de la violencia y la desigualdad. ●

Presidente Nacional del PRI